

El Comercio

EDITORIAL

¡Urgente reingeniería de la ONP!

El informe sobre la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que ha publicado la Defensoría del Pueblo, es tan completo como desgarrador. Revela, de modo contundente, el vejatorio trato que deben soportar millones de peruanos de la tercera edad por parte de una entidad pública, justo en una edad en que necesitan más apoyo.

Esta gravísima patología contra los derechos humanos, que fue denunciada por **El Comercio**, no puede continuar y demanda una acción urgente del Gobierno, el Congreso y de la sociedad para propiciar acciones de reforma.

La primera medida debe ser cambiar la actitud de los burócratas de la ONP, que están a la defensiva y evalúan cada caso con ánimo negativo y hasta confrontacional. Muestra de ello es que se exija a los jubilados presentar pruebas docu-

mentadas de su desempeño laboral, algo que no les corresponde y que los coloca en una posición desesperante; y que, en lugar de pagar mejor a los jubilados, se gasten más de 65 millones de soles en abogados que viven de hostigar a los candidatos a pensionistas y de prolongar las controversias.

¿Seguiremos esperando que mueran más jubilados en este vía crucis, como sucedió con Ubilde Suárez, presidente de la Confederación de Jubilados, que falleció de un infarto en plena diligencia judicial?

Ciertamente el problema no es de ahora, viene de muy atrás, cuando los gobiernos prácticamente desfalaron el Sistema Nacional de Pensiones para cubrir el déficit fiscal. Ello, sumado a la ineficiencia de la entidad, creó un forado enorme y quebró el sistema, por lo que ahora las pensiones deben ser cubiertas por el Estado.

“Siempre habrá inescrupulosos que buscan burlarse del Estado y la justicia para conseguir una pensión con expedientes adulterados. Pero justos no pueden pagar por pecadores ni la ONP escudarse en esas ocurrencias para dilatar la entrega de pensiones a quienes corresponde. El Ejecutivo y el Congreso deben trabajar para reformular la ONP”. EDITORIAL DE EL COMERCIO / 25 DE ABRIL DEL 2008

Ejemplar desalajo

Pacífico e impecable ha sido el desalajo de un grupo de invasores que acaba de realizar la Policía Nacional en Mangomarca, San Juan de Lurigancho. Ello demuestra que cuando hay labor de inteligencia previa, planificación y estrategia, es posible restaurar el imperio de la ley y el principio de autoridad, sin que la violencia se desborde.

También se ha hecho una significativa acción preventiva, pues los invasores, engañados y estafados por traficantes, se habían instalado en una zona de alto riesgo. Y saludamos, asimismo, la denuncia de los pobladores de las zonas populares aledañas, que exigieron el respeto a sus derechos, a la propiedad, al orden y a la formalidad.

Corresponde ahora a las autoridades fiscales y judiciales denunciar y sancionar a las mafias de traficantes de tierras, que deben entender que la violenta e ilegal ocupación de áreas ajenas jamás debe imponerse al derecho de propiedad. ■

A PROPÓSITO DE LA CRISIS ARGENTINA

Dos plazas, una misma nación

Editorial
“La Nación”
de Argentina

Las imágenes de las dos concentraciones multitudinarias que tuvieron lugar ayer frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, y en la Plaza del Congreso ofrecieron la triste sensación de un país fracturado, dividido por dos maneras diferentes de entender nuestra realidad y su proyección. Tal impresión, sin embargo, no debería llevarnos a la desesperanza: hubo dos plazas, pero hay una sola nación.

Los chacareros y los representantes de la clase media urbana que se dieron cita en el acto del campo son tan argentinos como las personas de extracción más humilde que acompañaron el mensaje del presidente del Partido Justicialista. Pese a todo lo

que se dijo, no hubo un solo enfrentamiento entre unos y otros manifestantes, y esa es una señal favorable en momentos de tanta crispación alentada desde la fracción gobernante.

No debería haber divisiones entre esos argentinos. Más allá de la lamentable prédica del ex presidente Néstor Kirchner por demonizar a los dirigentes ruralistas, ni estos ni quienes se sumaron a sus reclamos buscan desestabilizar al gobierno nacional ni tampoco encarecer la mesa de los argentinos, como suele apuntar el ex mandatario.

El mensaje que emanó de los oradores en el acto del sector agropecuario fue muy claro. Expresó el deseo de un camino hacia un auténtico federalismo, que respete las instituciones de la República y garantice la estabilidad de las reglas de juego en la economía, que permita trabajar en paz y producir para exportar

más, además de abastecer mejor a todos los argentinos.

El discurso del ex presidente apeló a más de una falacia y se ancló, como de costumbre, en un pasado que permanentemente es fuente de denostación, pero no de aprendizaje, y en una visión maniquea de la historia. En tal sentido, comparar a los hombres de campo con “grupos de tareas” como los que caracterizaron a uno de los períodos más trágicos de la Argentina solo puede interpretarse como una desafortunada declaración que delata un costado de perversidad.

El doctor Kirchner, tras haber gobernado el país en condiciones por cierto difíciles y haber terminado su gestión con no pocos aciertos que la ciudadanía le ha reconocido, debería optar por tender puentes entre los distintos sectores de la sociedad en lugar de hacer todo lo posible por derribar los que ya existen. Eso es lo que diferencia a un estadista de un simple dirigente político a la defensiva para preservar a toda costa sus cuotas de poder. Probablemente es pedirle demasiado al ex presidente: toda su vida ha construido poder a partir de antagonismos y casi nunca en virtud de consensos. Tal vez algún día compruebe con dolor que todo tiene un límite.

Si el matrimonio presidencial no advierte la necesidad de gobernar para todos los argentinos y de hacer de la búsqueda de consensos una práctica constante, es de esperar que los senadores que hoy deberán expedirse sobre el polémico proyecto sobre retenciones sí lo hagan. Sería una alentadora señal para albergar esperanzas en la reconstrucción de una institucionalidad perdida y para pensar que el principio constitucional de división de poderes, tras todas las absurdas delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo, no es letra muerta. ■



ILUSTRACIÓN: VÍCTOR AGUILAR

EL HABLA CULTA

Por Martha Hildebrandt

SANTO. En el habla familiar y popular del Perú y de otros países de Hispanoamérica, el adjetivo *santo* (que viene del latín *sanctus* ‘sagrado’) se usa, sustantivado, como sustituto de *cumpleaños*. El origen de este uso está, obviamente, en la obsoleta costumbre de poner al recién nacido el nombre de pila del santo o santa del día, según el calendario católico. Este uso americano (no generalizado) se documenta, asimismo, en la España rural.

rincón del autor

Beatriz Boza



Ahora que el fisco cuenta con recursos es el momento oportuno para promover los temas de transparencia y eficiencia en la gestión municipal

¿Canon o Foncomún?

Esta semana el Congreso ha debatido cambios a la distribución del canon minero para permitir que más distritos se beneficien de estos recursos extraordinarios. Hoy 66 municipios financian más del 70% de su presupuesto mediante el canon minero. Pero más allá del canon que depende de los precios internacionales, la pregunta que deberíamos hacernos es cómo se

financian “usualmente” las 1.834 municipalidades del país. ¿Sabía que en el 2002, antes del auge de los precios de los metales e hidrocarburos, el 75% del presupuesto asignado a todas las municipalidades provenía de una única fuente del Tesoro Público: el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún)? La Constitución creó este fondo para garantizar el financiamiento municipal, y sus recur-

sos provienen básicamente del 2% del IGV que pagamos todos cuando compramos algo. De esa manera todos financiamos a nuestras municipalidades. Hasta el 2003, ellas dependían del Foncomún e incluso hoy 423 se financian en más del 50% del Foncomún y 1.137 en más de un tercio.

En el proceso de descentralización que encarga más funciones a los gobiernos locales, deberíamos

HUMOR PROFANO

Por Molina



GRADO DE INVERSIÓN Y DE BRONCA

La arrogancia y la pica

Fernando Vivas
Periodista

Mientras Standard & Poor’s sentencia que el Perú es un buen país para hacer negocios, una encuesta de la PUCP dice que el 51% de limeños justifica el paro del 9 de julio y un 49% se solidariza con sus demandas.

La pica de las regiones llega a Lima y recorre todos los sectores. Se empoza en el DE (63%), pero también altera al AB (37%), a pesar de que las cosas la pintan cada vez mejor. Y en algunos de los mayores exponentes de la élite ilustrada, sobre todo quienes están bajo el signo de la izquierda, la pica repica y cascabelea.

Julio Cotler le decía a Rosa María Palacios, en su balance del paro, que la arrogancia de Alan García subleva a las masas. Y cuando su mirada pesimista se posó en el sur fue más duro y adjetivo con ‘el Grandazo’, pero planteó una solución: reconocimiento. La gente necesita que la reconozcan, así de simple, abstracto y simbólico.

¿Qué explica la santa pica colteriana y que la remate con una

propuesta simbólica que puede entenderse, en este continente del melodrama, como una agenda de encuentros emotivos?

Prefiero oír a Cotler hablar de sentimientos sociales que ver masticar cifras a tanto analista económico, pero no tengo una respuesta clara para mi pregunta. Haré un intento: el Perú es un cúmulo de complejidades y algunas de las más recientes

“ Quien tiene la sartén por el mango, que aguante las críticas y dormite en las regiones ”

derivan de un profundo desencuentro entre la soberbia de los poderosos y la desconianza de los representados, entre la arrogancia de unos pocos y la pica de muchos, ‘vladispot’ versus ‘moqueguazo’.

En medio de esta falla tectónica quiero destacar dos placas contrapuestas: la tentación autoritaria del político de origen mesocrático, que usa el poder para ajustar cuentas con

los grupos y élites académicas que lo descalificaron; y la frustración del proyecto político de estas últimas, aliadas con dirigencias sindicales y partidarias que, desde todos los grados de radicalismo, rechazan la gestión aprista. La bronca es tal que hay dirigentes del Apra, como Mauricio Mulder, que piden, a riesgo de vulnerar la estabilidad democrática, la represión genérica de todas las ONG, pues en ellas trabajan sus opositores de conciencia; y hay de estas últimas que quisieran ver a García en un banquillo similar al de Alberto Fujimori.

Esta última pica no es la de Moquegua, Madre de Dios o la de las víctimas de la ONP. Es, digamos, una pica dentro del sistema, pero se solidariza con la otra, que, ante la arrogancia del poder, puede rápidamente salir de todos los cauces manejables. Cuando Cotler habló de reconocimiento aludía, por supuesto, a la necesidad de que quien tiene la sartén por el mango aguante las críticas, dormite humildemente en las regiones calientes y redoble su voluntad redistributiva; pero me pregunto si su propia pica se aplacaría con el reconocimiento oficial de que la inteligencia crítica es necesaria ante los grados de inversión y las cifras en azul. ■

reflexionar acerca del financiamiento municipal con visión de largo plazo. En ello, el Foncomún cumple un papel muy importante, especialmente si se ata al cumplimiento de metas y eficiencia en la gestión. Hoy ese no es el caso porque la asignación del Foncomún se realiza en función de población, pobreza y ruralidad, pues busca que las municipalidades más pobres y remotas puedan también beneficiarse del auge de nuestra economía. Pero debido a que se toma en cuenta la situación de la población y no el resultado de la ges-

ción de la autoridad, no existe ningún incentivo económico para que un alcalde use esos recursos eficientemente. Es más, hoy se “castiga” a la municipalidad que reduce la pobreza extrema, pues, según la fórmula de distribución, recibiría menos Foncomún. Esto tiene que cambiar. ¿Cómo? “Premiando” económicamente a quien garantiza que esos recursos públicos sean bien utilizados.

También debemos repensar el monto del presupuesto municipal, sin que ello implique más costo para la ciudadanía. Como país, bien

podríamos reasignar un porcentaje mayor del IGV a las municipalidades. En vez de 2% podría ser 3% del 19% que nos cobran de IGV. Esa diferencia podría usarse para premiar económicamente a aquellas que hacen un buen uso de sus recursos y cumplen a tiempo con rendir cuentas a la Contraloría y a la ciudadanía. Ahora que el fisco cuenta con recursos y que aún no se ha iniciado la campaña electoral municipal, es el momento oportuno para promover y hacer hincapié en los temas de transparencia y eficiencia en la gestión municipal. ■